SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Órgano unipersonal) de 23 de octubre de 2003

Asunto T-25/02

Michel Sautelet contra Comisión de las Comunidades Europeas

«Funcionarios – Informe de calificación – Elaboración tardía – Recurso de indemnización»

Texto completo en lengua francesa	II - 1255
Lexio combieio en jengua trancesa	11 - 1/55

Objeto:

Recurso que tiene por objeto por un lado, la anulación de las decisiones de la Comisión por las que se desestiman parcialmente las reclamaciones del demandante dirigidas a obtener unas indemnizaciones por daños y perjuicios como reparación del perjuicio moral causado por el retraso en la elaboración de sus informes de calificación correspondientes a los períodos 1993/1995, 1995/1997 y 1997/1999 y, por otro lado, una pretensión de indemnización por daños y perjuicios como reparación del referido perjuicio moral.

Resultado: Se condena a la Comisión a pagar a la demandante la cantidad de 3.000 euros, que se añade a la cantidad de 1.500 euros ya concedida por la AFPN. Se desestima el recurso en todo lo demás. Se condena en costas a la Comisión.

Sumario

1. Funcionarios - Recurso - Recurso de indemnización - Pretensión de anulación de la resolución administrativa previa por la que se desestima la solicitud de indemnización - Pretensión que no es independiente de la pretensión de indemnización

(Estatuto de los Funcionarios, arts. 90 y 91)

2. Funcionarios - Calificación - Informe de calificación - Elaboración -Retraso - Comportamiento lesivo causante de un perjuicio moral - Retraso parcialmente imputable al funcionario (Estatuto de los Funcionarios, art. 43)

1. La decisión de una institución por la que se desestima una pretensión de indemnización forma parte del procedimiento administrativo previo que precede a un recurso por responsabilidad interpuesto ante el Tribunal de Primera Instancia.

En consecuencia, las pretensiones de anulación dirigidas contra dicha desestimación no pueden apreciarse con independencia de las pretensiones de responsabilidad. En efecto, el acto que contiene la postura de la institución durante la fase administrativa previa únicamente tiene como efecto permitir que la parte que ha sufrido un perjuicio presente ante el Tribunal de Primera Instancia una pretensión de indemnización.

(véase el apartado 45)

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 18 de diciembre de 1997, Gill/Comisión (T-90/95, RecFP pp. I-A-471 y II-1231), apartado 45; Tribunal de Primera Instancia, 6 de marzo de 2001, Ojha/Comisión (T-77/99, RecFP pp. I-A-61 y II-293), apartado 68; Tribunal de Primera Instancia, 5 de diciembre de 2002, Hoyer/Comisión (T-209/99, RecFP pp. I-A-243 y II-1211), apartado 32

2. La Administración debe velar por que los informes de calificación se redacten periódicamente en las fechas señaladas por el Estatuto y por que se elaboren con regularidad, tanto por motivos de buena administración como para salvaguardar los intereses de los funcionarios. Un retraso registrado en la elaboración de los informes de calificación puede, por sí mismo, perjudicar al funcionario por el mero hecho de que el desarrollo de su carrera puede verse afectado por la falta de tal informe en un momento en que deban adoptarse determinadas decisiones que le afectan. Un funcionario que sólo tiene un expediente personal irregular e incompleto experimenta por este motivo un perjuicio moral relativo al estado de incertidumbre y de inquietud en que se encuentra acerca de su porvenir profesional. A falta de circunstancias particulares que justifiquen los retrasos comprobados, la Administración incurre en una irregularidad que puede generar su responsabilidad.

En cambio, un funcionario no puede quejarse del retraso con que se haya elaborado su informe de calificación cuando dicho retraso le sea imputable, al menos en parte, o en el supuesto de que haya contribuido a ello de modo notable.

(véanse los apartados 71 a 73)

Referencia: Tribunal de Justicia, 18 de diciembre de 1980, Gratreau/Comisión (asuntos acumulados 156/79 y 51/80, Rec. p. 3943), apartado 15; Tribunal de Justicia, 6 de febrero de 1986, Castille/Comisión (asuntos acumulados 173/82, 157/83 y 186/84, Rec. p. 497), apartado 36; Tribunal de Primera Instancia, 8 de noviembre de 1990, Barbi/Comisión (T-73/89, Rec. p. II-619), apartado 41; Tribunal de Primera Instancia, 16 de diciembre de 1993, Moritz/Comisión (T-20/89, Rec. p. II-1423), apartado 50; Tribunal de Primera Instancia, 28 de mayo de 1997, Burban/Parlamento (T-59/96, RecFP pp. I-A-109 y II-331), apartados 44 y 50; Tribunal de Primera Instancia, 12 de junio de 2002, Mellone/Comisión (T-187/01, RecFP pp. I-A-81 y II-389), apartados 77, 78 y 79